



Un ecosistema de buena gobernanza en una época de cambios disruptivos

Por: Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

En tiempos de crisis recurrente hemos comprobado que las debilidades y la ineficiencia de la gobernabilidad disminuye el nivel de vida de la sociedad. Algunas lecciones sobre buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas vividas en crisis pasadas parece que no han sido aprendidas aún. Asimismo, es indudable que el coronavirus ha acelerado el curso cotidiano de nuestro quehacer que ya iba acelerado, y que ahora con la gobernabilidad fracturada y el aumento de la corrupción, amenaza con una disruptión que no pudimos prever. Esta realidad exige fortalecer las capacidades de gobernanza para construir una sociedad inclusiva y próspera.

Por ello, la pandemia es una prueba de gobernabilidad. Gobernar en medio de esta pandemia de dimensiones extraordinarias es el mayor reto que puede enfrentar un gobernante y los aspirantes a gobernar el país. La confianza en las principales instituciones democráticas pende de un hilo frágil, por ello en esta pandemia tenemos que preservar la confianza en nuestras instituciones muy especialmente en la institución

electoral. La desconfianza en los partidos políticos y en los gobiernos que emana del voto popular ha disminuido vertiginosamente.

Asimismo, es evidente que la corrupción ha irrumpido como un factor disruptivo en nuestro quehacer económico, político y social. El problema de la corrupción está instalado hace mucho tiempo como una de las principales preocupaciones de nuestra población. Muchas de las prácticas de corrupción que continuamos viendo se encuentran muy vinculadas a la opacidad, el secreto y la ausencia de la transparencia en el quehacer público. Está comprobado que la opacidad es el escenario de cultivo que permite la proliferación de actuaciones corruptas. La evidencia empírica señala que la corrupción disminuye la capacidad del estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad, a la vez que compromete la productividad y el crecimiento de las economías al distorsionar la asignación de recursos. Más importante aún son las consecuencias sobre las instituciones gubernamentales.

Época de cambios disruptivos

Lo disruptivo del virus ha generado una encrucijada que nos exige gobernar bien y explorar horizontes que permitan continuar cerrando la brecha entre el corto y largo plazo y los problemas estructurales y los incipientes. La disrupción es una perturbación que no anticipamos y crea nuevos niveles de complejidad y aceleración en la velocidad del cambio. Cuando ocurre la disrupción nuestros esfuerzos para mitigar el daño y maximizar la oportunidad son obstaculizados cuando no podemos obtener a tiempo las competencias claves.

Hemos constatado que el país continúa experimentando un deterioro acelerado en la gobernanza pública y un aumento recurrente en la corrupción propiciado por el partidismo y el clientelismo político. El precio electoral de la corrupción tiene sus raíces en las puertas giratorias. Por décadas, hemos visto que los incumbentes de un cargo público van a trabajar a la empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público.

La compleja realidad que vivimos revela nuevos desafíos no previstos. La pandemia del Covid-19 es uno de esos retos en el marco de las elecciones modernas. Si las elecciones son la piedra angular de la democracia merece la pena que reflexionemos como pueden llevarse a cabo en estos tiempos de incertidumbre radical. Mermar la reputación del sistema electoral conlleva riesgos políticos, legales y operativos.

Gobernabilidad y capacidades institucionales

Si algo ha quedado claro en esta crisis es que los desafíos que enfrentamos superan las capacidades de un gobierno. Es evidente que nuestras instituciones de gobierno no están preparadas para manejar cambios acelerados. La crisis ha puesto de manifiesto que el deterioro es sistémico y las condiciones de incertidumbre exigen que manejemos los riesgos inherentes que tenemos que gestionar de manera más ágil y con múltiples

insumos de conocimiento y saberes. La capacidad de buen gobierno es considerada como un conjunto de medidas político-administrativas dirigidas a transformar instituciones públicas disfuncionales en proveedores de servicios eficientes y transparentes con el objetivo de promover la gobernabilidad. La gobernabilidad se refiere a que el gobierno cuente con las capacidades para dirigir eficazmente a la sociedad en general o en específicas situaciones, que por sus acciones pueda satisfacer las demandas y resolver los problemas y conflictos sociales (Aguilar, 2016).

La propagación del virus pone a prueba a todos los actores políticos: gobernadores, legisladores, alcaldes, empresarios, líderes comunitarios y la ciudadanía en general. Nos enfrentamos a un futuro cada vez más desconocido y enigmático que exige habilidades que hoy no tenemos por lo que hay que movilizar el conocimiento y la información como recursos indispensables para generar respuestas inteligentes. La indignación ante los actos de corrupción debe ser constante porque el dinero público no sobra y es indispensable para salvar vidas y pagar servicios básicos. Hay que romper con la premisa de que la corrupción en tiempos de normalidad no es importante y que el dinero público no nos pertenece porque no podemos disponer de él ni de su destino.

Lo más esperanzador de esta crisis pandémica que vivimos, precedida por las catástrofes naturales y los terremotos, es que ha puesto encima de la mesa asuntos que parecía imposible siquiera discutir desde el valor de lo público. Por décadas, la atención a la competencia electoral acaparó todos los momentos de la vida pública. Sin embargo, en esta instancia no podemos olvidar que la política tiene tres grandes momentos: el electoral, el de la configuración de los gobiernos y la gestión gubernamental propiamente.

Contar con un buen gobierno y con instituciones que rindan cuentas son elementos fundamentales para maximizar la eficacia de las acciones de desarrollo y reducir la desigualdad. Existe una clara correlación entre los procesos de gobernanza y el desarrollo económico de los países. De igual forma, es fundamental la capacidad y competencia de los gobiernos para ofrecer servicios públicos, apoyar un entorno generador de empleos y de crecimiento en pro del bien común, abordar las deficiencias del mercado e involucrar ciudadanos en el proceso, lo que conduce hacia sociedades transparentes y respetuosas de las leyes e incentiva la inversión del sector privado.

Para abordar el desafío de la gobernabilidad que encaramos, caracterizado por deficiencias en la prestación de servicios, corrupción y aumento en la desigualdad, es preciso que nos replanteemos el proceso de gobernanza para lograr los objetivos de bienestar común, crecimiento y equidad. En este sentido, las tensiones resultantes de la debacle fiscal y la crisis económica, política y social que hemos vivido por más de una década nos han llevado a que le prestemos mayor atención a los principios rectores del buen gobierno de lo público y a replantearnos el papel de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.

De acuerdo con Douglas North, Premio Nobel de Economía, el dilema fundamental para explicar el éxito o el fracaso de las sociedades surge del conflicto entre eficiencia económica y capacidades de gobernanza. Señala que cuando el interés particular de los

gobernantes se sitúa por encima de la eficiencia y la prosperidad económica el resultado es nefasto para el crecimiento económico y el bien común de la sociedad.

Reflexiones finales

El coronavirus sellará un antes y un después en el acontecer político, económico y social. La oportunidad que nos presenta la coyuntura actual es centrarnos en el impacto cualitativo de nuestras decisiones y acciones para generar soluciones a los problemas complejos que nos afectan y movernos a la acción rompiendo con los narrativos disruptivos que aumentan las divisiones en detrimento de la innovación y el cambio transformacional. Es impostergable darle importancia a la obligación compartida de todos los actores de la sociedad que nos muevan a un desarrollo social sostenible y un crecimiento económico inclusivo. En esta ocasión no podemos darle espacio a que se creen falsos liderazgos y que ocupen el campo los políticos populistas y la propaganda mediática.

La clase gobernante debe comenzar por entender que la gobernanía es un trabajo de beneficio colectivo concebida como el vehículo para servirle a la sociedad y no para servirse de ella y cambiar la forma irresponsable de manejar los recursos del estado. Si algo ha quedado claro en esta gesta de pueblo es que cada ciudadano es distinto en pensamiento, en la manera de ver la vida y en su accionar, pero eso no nos distancia en el interés y el compromiso de forjar un mejor país.

En una época en que hay tantas incógnitas y no hay respuestas fáciles debemos aprovechar las oportunidades que nos plantea la disruptión para generar un ecosistema de buena gobernanza de los asuntos públicos. El desafío no es trivial, no es fácil y hay mucho trabajo por hacer. Si no somos capaces de aprovechar las crisis para llevar a cabo las reformas necesarias, el futuro no será nada prometedor.

Para avanzar en la mejora de la gobernanza precisamos de un liderazgo comprometido y valiente para impulsar cambios que nos muevan al progreso colectivo aún en la actualidad de una época de cambios disruptivos y de gobernabilidad fracturada. Mejorar la gobernanza para propiciar la gobernabilidad y crear una sociedad inclusiva y próspera requiere: invertir en la educación a todos los niveles; incrementar la movilidad social y económica y fomentar la inversión, la productividad y la creación de empleos

A quienes prefieren esperar siempre a tiempos mejores hay que recordarles que cuando la calma vuelve casi nunca se han mejorado los problemas.

Julio 2020